

dos estén dispuestos a pagar la factura en función de su capacidad de pago. La reforma fiscal es sustancial en el programa.

—Usted insiste en la necesidad de que exista una economía verdaderamente competitiva. ¿Cómo se concretaría esto en el plan?

—Ya no es posible seguir manteniendo el sistema de inversiones a través de circuitos privilegiados de financiación. Esto tiene que desaparecer si queremos una sociedad competitiva. Y ello va a ocasionar víctimas, claro está. Hay que ampliar las áreas de mercado y hacer un sector público mejor, cueste lo que cueste.

—Entramos así en el punto "duro" del programa: la política de rentas.

—Hay que programar los aumentos del coste del trabajo y de las restantes rentas. Hay que controlar esos crecimientos. El país tiene que apostar a reducir la in-

flación de una manera gradual. Hacerlo de golpe es imposible; no sería aceptado por muchos sectores sociales. Hay que fijar para cada ejercicio un crecimiento de los precios con el que el Gobierno se comprometa en todas sus actividades. Esa tasa fijada "a priori" sería la máxima que podría subir cualquier retribución. Pero hay que decir desde ahora que no se podrían compensar a los trabajadores de las nuevas alzas de los precios internacionales, del petróleo o de cualquier otra materia prima: justo es reconocerlo. Habría, sin embargo, que tener presente que, si ese objetivo fijado de antemano no se consigue, habría que compensar a quienes recibieron sus retribuciones de acuerdo con ese tope que no se cumplió. La política fiscal jugaría como complementaria de esta política de rentas, en beneficio fundamentalmente de ese tercer sec-

tor de la sociedad al que antes me he referido y cuya capacidad de presión es escasa.

—¿Cuál sería el papel de la política monetaria?

—La política monetaria tendría que venir al final. Porque si fijamos un crecimiento de las disponibilidades líquidas antes de haber comprometido unos crecimientos del sector público y de las rentas moderados no podremos restablecer el orden. Solamente servirá para algo si arropa a esas bases. Yo no creo que se pueda empezar por la política monetaria.

## Un pacto político para salvar la economía

—Al hablar de moderar el crecimiento de los salarios de acuerdo

# Estadística: dimisión colectiva

En menos de setenta y dos horas, tres acontecimientos insólitos se produjeron en relación con el índice de precios. El 25 de mayo, el presidente del Consejo de Economía Nacional anunciaba que el Gobierno le había encargado la preparación de un índice destinado exclusivamente a negociar los aumentos salariales. El viernes 27, el director del INE hacía unas declaraciones a "Ya" en las que invalidaba abiertamente el índice de precios al consumo actualmente vigente. El tercer acontecimiento no se hacía esperar: cuatro directores —el quinto estaba en el extranjero— dimitieron de sus cargos; los seguían los diez jefes de servicio y 43 de los 47 jefes de sección.

¿Quién iba a pensar que 57 altos cargos utilizaran como forma de protesta la dimisión, en una Administración en la que la obtención del cargo es una filosofía, un principio de funcionamiento?

Era el fin de un largo proceso de atentados contra el índice de precios al consumo y contra la honestidad y capacidad profesional de los estadísticos. Un proceso de meses del que hemos dado cumplida cuenta en las páginas de TRIUNFO (ver números 735, página 18, y 740, página 18).

En pocas palabras se podría resumir así: un director dimitió porque sus reiteradas peticiones de que el nuevo índice (base 1976) fuera declarado oficial, la protesta de los estadísticos, un retraso de más de tres meses en la publicación de los datos de enero, febrero y marzo; las dificultades del Gobierno en encontrar un sustituto para Ricardo Torró; la negativa de cuantos catedráticos y afamados estadísticos fueron invitados a ocupar la Dirección General, hasta que por fin se encontró la aceptación de Andrés Fernández Díaz, profesor agregado de Política Económica, que había sido estadístico interino (no llegó a presentarse en las oposiciones) y también director general en la Subsecretaría de Planificación de Presidencia.

Así estaba el INE. Y así está. Cuando los partidos presentan sus programas económicos y se debate la salida que se dará a la crisis económica tras las elecciones. A los intereses electoralistas del Gobierno se atribuyen muchas de las desgracias de las estadísticas españolas en la presente coyuntura: no interesa presentarse con más de un 30 por 100 de

inflación reconocida ante los electores.

Pero las cosas van más lejos. Los esfuerzos de ministros y prohombres del Gobierno en echar todo sobre el índice de precios al consumo, las presiones para aprobar un nuevo índice y rápidamente, sin la mínima preparación y solvencia, persiguen fines por encima del 15 de junio: sencillamente, que cuando se llegue a la mesa de negociaciones para pactar un plan económico el Gobierno presente unos datos de crecimiento de la inflación sensiblemente inferiores a los reales, que son los que mejor marca el índice de precios al consumo.

El hecho de que haya sido el Consejo de Economía Nacional, un organismo típicamente franquista y falto de medios para acometer la tarea, a quien se haya encargado nada menos que la separación del actual índice en dos bloques, sólo uno de los cuales serviría para la negociación salarial, es buen indicativo de las intenciones del Gobierno. El propósito es claro y sus posibles consecuencias también: porque no se va a poder llegar a ningún pacto si las bases estadísticas en que se sustenta no son irropeables. Y esta purista, hoy por hoy, sólo la puede proporcionar un cuerpo técnico independiente como es el de los estadísticos.

En este contexto, las declaraciones del director del INE han parecido algo más que un exabrupto de inexactitudes, que una muestra de incapacidad: forman, al menos así lo parece, parte del mismo plan que tan claros hitos ha tenido en los últimos tiempos. Solo que la serie de errores que sus palabras contienen, los ataques directos a la profesión en terrenos tan delicados como el secreto profesional y en la búsqueda de cabezallas agitadores en donde sólo ha habido respuestas colectivas, ha provocado algo que no estaba previsto: la reacción automática, como un solo hombre, por encima de diferencias ideológicas —y las hay—, del conjunto de los estadísticos.

Es un hecho insólito en la historia reciente de España y está lleno de enseñanzas de cara al futuro: los cuerpos altamente tecnificados quieren marcar su independencia respecto a cualquier opción política en defensa precisamente de su capacidad profesional.

Al día siguiente, los estadísticos informaban a la prensa de su posición ante

las declaraciones de Fernández Díaz. Enumeraba con argumentos irrefutables, tanto en la exposición como por la captación —buena o mala, la mayor que hoy hay en el país— una larga lista de errores de bulto en las apreciaciones del director general. Y recordaba la dureza de la oposición que todos ellos tuvieron que superar para entrar en el cuerpo. La lista de falsedades netas y de errores de apreciación superaba la quincena en las declaraciones del director, automáticamente casi coincidentes en el tiempo con las propuestas de García Ramal.

Ante tales argumentos cabe concluir algo más que evidente: las intenciones que podía perseguir el director del INE se han vuelto en su contra. Y quienes inspiran en última instancia el plan destinado a arruinar el índice de precios al consumo se han encontrado con una dificultad con la que no contaban: el rechazo abierto y decidido de los estadísticos, de todos los estadísticos. Porque, en el contexto político al que antes nos referíamos, el índice de precios al consumo es irrefutable mientras no se elabore otro con la misma rigurosidad científica y metodológica con que éste fue preparado. Y si así se hiciera, probablemente daría resultados muy similares a los del actual.

Lo malo es que esto es imposible, porque se tardaría cuando menos los dos años y medio que tardó en hacerse el anterior. Y como ese plazo no debe entrar en el cálculo de actuaciones inmediatas del Gobierno, para después de las elecciones tendremos que asistir necesaria y desgraciadamente a nuevos atentados contra el índice que hoy mejor refleja la evolución de la inflación en nuestro país, que con un claro ánimo de confundir a la opinión pública se presenta junto a otros dos indicadores: el uno obsoleto, el de base 1968, y el otro una especie de invento injustificable desde el punto de vista científico.

Lo cierto es que, mientras todo esto ocurre, la inflación supera el 30 por 100 anual. Pese a quien pese, esa es la verdad. Una verdad que los estadísticos defienden porque no quieren que su capacidad profesional sea puesta en tela de juicio. Y una verdad que los trabajadores, todos los españoles, tendrán que defender si no quieren que se les engañe. ■ C. E.

con un objetivo a fijar cada año, usted, pidiendo a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos de izquierda, que acepten como válido y realizable un objetivo. Pero, ¿cómo hacérselo creer y convencerlos?

—Es una objeción válida. El primer punto sería la credibilidad de los hombres. Y eso es difícil. Se podrían utilizar algunos elementos como apoyo: el primero sería la comparecencia del Gobierno con ese programa al nuevo Parlamento. Que el programa fuera aprobado en el Parlamento y que el Gobierno se presentara públicamente a las Cortes para dar cuenta de su marcha. Veo otra alternativa: la existencia de una comisión de encuesta y vigilancia del programa a partir de las propias Cortes, de manera que los partidos pudieran seguir su evolución y poder pedir información de las actuaciones del Gobierno. No se puede pensar que otros organismos funcionen para ello: ni el Consejo de Economía Nacional ni otros. Hay que moverse en el cauce estrictamente político. Comprendo que eso es poco, pero no veo otra alternativa. En definitiva diría que lo que hace falta es un pacto político para salvar la economía al mismo tiempo que se negocia la Constitución.

—¿Y el paro? ¿Cómo luchar contra el paro?

—Desgraciadamente se puede hacer poco con el problema del desempleo. No descarto acciones de todo tipo, dentro de un esquema tradicional, pero creo que se va a conseguir poco. Preocupación fundamental habría de ser el desempleo joven en esta línea. Pero en general no soy optimista en este tipo de medidas mientras no se supere la inflación y los empresarios vuelvan a invertir. Claro está que mientras esto ocurra habrá que plantearse el tema del seguro de desempleo: habría que recargar nuevamente al sector público, además, con otro peligro: la sensación de desmoralización que para el trabajador supone el seguro y los fraudes que en el mismo se producen. Pero en la medida de lo posible, habría que mejorar el seguro de desempleo. Porque quede clara una cosa: el plan que propongo no va a mejorar la situación de desempleo. Habrá algunos empleos suplementarios si, por ejemplo, se hace la reforma fiscal.

Fuentes Quintana no ha sido optimista en ningún momento de la entrevista. Ve los problemas y comprende lo difícil de las soluciones que propone. Sabe que son polémicas y que difícilmente van a ser aceptadas por todos. "Hay que entrar en una negociación y unos y otros tendrán que ceder, modificar sus planteamientos en muchos aspectos. También, cómo no, habría que modificar el plan en algunos extremos como producto de esta negociación". Y hace un último llamamiento: "Hay que encontrar una solución. Pero a lo mejor ya es demasiado tarde". ■ C. E.